



Columna



Jorge Astudillo

Académico Facultad de Derecho, U. Andrés Bello, sede Viña del Mar

La violencia como negación de la democracia

Los hechos ocurridos en la U. Austral de Chile, en Valdivia, durante la ceremonia de inauguración del año académico, no puede ser relativizado ni reducido a episodios aislados. El ataque contra la ministra Ximena Lincolao, al parecer por parte grupos organizados de estudiantes, constituye un hecho grave, marcados por una total ausencia de racionalidad y completamente alejado de cualquier estándar democrático.

En el marco de una democracia, la divergencia no sólo es legítima: es necesaria. Las universidades, en particular, deben ser espacios privilegiados para la confrontación de ideas y argumentos, el debate y de contribución a la formación de ciudadanía informada y pluralista. Empero, cuando la mera violencia reemplaza al argumento y las ideas, y la funa o la agresión física se convierten en herramientas políticas, lo que aparece, a pesar de lo que algunos creen, no es una democracia radical legítima, sino la negación de la democracia.

Resulta paradójico: sectores que enarbolan, con una pretensión de exclusividad y superioridad moral e intelectual, la defensa de la democracia, la justicia social y los derechos, en la práctica esconden una profunda intolerancia hacia quienes sostienen cosmovisiones distintas de la sociedad. No estamos frente a una contradicción, sino de una expresión potente de una lógica altamente excluyente, que considera ilegítimo al adversario y, por tanto, justificable su silenciamiento, incluso por medio de las agresiones verbales y físicas.

El triste espectáculo de Valdivia nos pone frente a una forma de ideologización extrema que socava las bases de nuestro sistema político democrático. La democracia es incompatible con el intento de establecer una verdad única ni en expulsar al que piensa distinto, sino en garantizar que todas las ideas y sensibilidades puedan coexistir, incluso -especialmente- cuando resultan incómodas para el adversario, particularmente para quienes ejercen poder.

Además, es inaceptable la evidente falta de condiciones de seguridad en el espacio provisto por la U. Austral para la realización de este evento académico. Resulta intolerable que una autoridad pública no pueda asistir a una actividad académica sin exponerse a agresiones. Las universidades tienen el deber de resguardar no sólo la integridad física de quienes las visitan, sino también el clima de respeto indispensable para el intercambio de ideas.

Frente a estos hechos, la respuesta del sistema político debe ser clara y sin matices. Se debe investigar lo ocurrido con mucho rigor, identificar a los responsables y procurar hagan efectivas las responsabilidades que correspondan. La impunidad -o, peor aún, la justificación ideológica de estos actos- sólo profundiza el deterioro del debate público y de nuestra democracia.

Frente a hechos como los del miércoles no puede haber dobles estándares, ni justificaciones o relativizaciones. La violencia política es inaceptable, venga de donde venga. Vivir la democracia implica también defender sus reglas, incluso cuando quien las vulnera dice hacerlo en su nombre.